

Gobierno francés anuncia nuevas medidas de apoyo a las empresas afectadas por revueltas

El Gobierno francés anunció este martes nuevas ayudas dedicadas a los al menos 3.000 comercios vandalizados y saqueados durante el último fin de semana en el país, entre ellas préstamos hasta 50.000 euros sin intereses y un aplazamiento de las deudas tributarias.

Estas medidas se unen a los dispositivos de desempleo parcial para los empleados afectados por el impacto de los disturbios y financiado por el Estado francés, así como la creación de un fondo de ayuda a las empresas y la movilización del sector asegurador.

Tras una reunión extraordinaria entre miembros del Gobierno y representantes de empresas, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, detalló que, desde el viernes y «de manera inmediata», las compañías podrán reforzar su tesorería con ese tipo de préstamos sin intereses para las empresas y acordados por el banco público Bpifrance.

«Este es un momento de mucha gravedad», ahondó Lescure, quien explicó que una simple declaración de siniestro ante la aseguradora servirá para el trámite del préstamo.

Por su parte, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, anunció este martes que prevé habilitar un aplazamiento simplificado de las deudas tributarias.

Amiel insistió asimismo en la necesidad de «hacer pagar a los saqueadores», aludiendo a la futura tramitación del proyecto de ley «quien rompe, paga». Según precisó el ministro, si esta iniciativa sale adelante, los ingresos ilícitos procedentes de tráfico clandestinos, hurtos o la receptación de bienes robados se descontarán de las ayudas públicas que perciba el infractor.

Los saqueos del pasado fin de semana surgidos al margen de las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos afectaron tanto a grandes ciudades, como París, Marsella o Lyon, como a otras medianas (Lille) o incluso pequeñas (Limoges).

Cerca de 2.500 personas (70 % de ellos mayores de edad y 95 % hombres) fueron arrestados. De momento, 123 de ellos pasaron a prisión provisional.

UR